

**AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION 3**

Avda Pedro San Martin S/N
Santander
Teléfono: 942357125
Fax.: 942357130
Modelo: C1921

**Proc.: PROCEDIMIENTO
ABREVIADO**

Nº: **0000022/2016**
NIG: 3902041220110003550
Resolución: Sentencia 000310/2016

Procedimiento Abreviado 0000855/2011 - 00

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N°1 (Penal) de Castro-Urdiales

| Intervención: | Interviniente: | Procurador: |
|---------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Acusado | FRANCISCO GONZALEZ PEREZ | JAVIER IGLESIAS VILLADA |
| Acusado | SANTIAGO BERRIOLOPEZ GONZALEZ | TOMÁS GARRO GARCÍA DE LA TORRE |

AUDIENCIA PROVINCIAL**CANTABRIA****(Sección Tercera)**

Rollo de Sala número: 22/2016.

Juzgado de Instrucción núm. 1 de Castro Urdiales

Procedimiento Abreviado, núm. 855/11

SENTENCIA N°: 000310 / 2016

=====

ILMOS. SRES.:

Presidente:

D. AGUSTÍN ALONSO ROCA.

Magistrados:

D.^a MARÍA ALMUDENA CONGIL DÍEZ.

D. JUAN JOSÉ GÓMEZ DE LA ESCALERA.

=====

En Santander, a cuatro de noviembre de dos mil dieciséis.

Este Tribunal, constituido por los Ilmos. Sres. Magistrados mencionados al margen, ha visto en juicio oral y público la presente causa penal de Procedimiento Abreviado procedente del JUZGADO DE INSTRUCCION NÚMERO 1 DE LOS DE CASTRO URDIALES, y seguida con el número 855/2015, Rollo de Sala número 22/2016, por un delito de Atentado, un delito de Lesiones y una Falta de Lesiones, contra D. FRANCISCO GONZÁLEZ PÉREZ y D. SANTIAGO BERRIOLÓPEZ GONZÁLEZ, en calidad de acusados, respectivamente representados por los Procuradores de los Tribunales D. Javier Iglesias Villada y D. Tomás Garro García de la Torre y asistidos por las Letradas D.^a Haifa Rifaie Selas y D.^a María Begoña Vega Martín, ambos en situación de libertad por esta causa.

Como Acusación Particular, D. FRANCISCO GONZÁLEZ PÉREZ y D. SANTIAGO BERRIOLÓPEZ GONZÁLEZ, con las representaciones y defensas antes mencionadas, y con la intervención del Ministerio Fiscal en la representación que ostenta del mismo la Ilma. Sra. D.^a María Felicidad Andrés Puerto.

Es Ponente de esta resolución la Ilma. Sra. Magistrada de esta Sección Tercera, D.^a **MARÍA ALMUDENA CONGIL DÍEZ**, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La presente causa se inició por el Juzgado de Instrucción indicado en el encabezamiento de esta sentencia, tramitándose el procedimiento correspondiente, por las normas del Proceso Abreviado, y remitiéndose a este Tribunal para su enjuiciamiento, acordándose la celebración del Juicio Oral, que tuvo

lugar en esta sede el pasado día 7 de octubre de 2016, quedando la causa vista para Sentencia y siendo deliberada por los magistrados que la suscriben.

SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal, en el acto del plenario elevó sus conclusiones provisionales a definitivas calificando los hechos como constitutivos de un delito de lesiones previsto y penado en el artículo 147.1º del Código Penal y de una falta de lesiones prevista y penada en el art 617.1 del Código Penal, interesando la imposición al acusado D. Santiago Berriolópez González como autor del delito de lesiones de la pena de 1 año y 9 meses de Prisión con la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y al acusado D. Francisco González Pérez como autor de la falta de lesiones a la pena de 2 meses de Multa con una cuota diaria de 12 €, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago conforme a lo dispuesto en artículo 53 del Código Penal. Asimismo, en concepto de responsabilidad civil interesó la condena de D. Santiago Berriolópez a indemnizar a D. Francisco González en la suma de 1.027,80 euros por el tratamiento oncológico, 7.170 euros por las Lesiones y 1.000 euros por las secuelas y al Servicio Cántabro de Salud y al Servicio Vasco de Salud en la cantidad a que ascendió el coste de la asistencia sanitaria prestada a D. Francisco que en el acto del juicio o en ejecución de sentencia resulte acreditada. Asimismo, interesó la condena de Francisco González a indemnizar a Santiago Berriolopez en la suma de 525 euros por las lesiones y al Servicio Cántabro de Salud en la suma de 163,60 euros.

- La acusación particular ejercitada por D. Francisco González Pérez elevó sus conclusiones

provisionales a definitivas interesando la condena D. Santiago Berriolópez González como autor de un delito de lesiones previsto y penado en el artículo 147.1º del Código Penal a la pena de 2 años de Prisión, y a la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, interesando que en concepto de responsabilidad civil a indemnizara a D. Francisco en las siguientes cantidades:

Por los días invertidos en la curación de las lesiones, 2 de ingreso hospitalario y 247 días improductivos, la suma de 14.119,42 euros.

Por la secuela consistente en agravación de artrosis previa al traumatismo en grado moderado y material de osteosíntesis en grado ligero la suma de 5.122,88 euros y por el perjuicio estético que considera ligero la suma de 1.330,74 euros, lo que ascienden cómputo global en concepto de secuelas a la suma de 6.453,62 euros.

Por los gastos médicos y daños materiales la suma global de 2.785,80 euros, que se desglosa en los siguientes conceptos: por los gastos de tratamiento odontológico 1.267,80 euros; por la consulta de traumatología realizada en la clínica Castro de 3 de octubre de 2011 la suma de 85 euros y por las gafas que se le rompieron en la suma de 1.433 euros.

- La acusación particular ejercitada por D. Santiago Berriolopez González elevó sus conclusiones provisionales a definitivas modificando no obstante sus conclusiones 4ª y 5ª. Así pues, interesó la condena de D. Francisco González Pérez como autor de un delito Atentado a la autoridad previsto y penado en los

artículos 550 y 551.2 del Código Penal y de una falta de lesiones prevista y penada en el artículo 617 del Código Penal, interesando su condena como autor de dicho delito a las penas de 2 años de Prisión con la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho sufragio pasivo durante el tiempo de condena y de 6 meses de Multa con cuota diaria de 18 euros, y como autor de la falta de lesiones a la pena de 2 meses de Multa con igual cuota de 18 euros diarios, interesando la apreciación de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Asimismo, en concepto de responsabilidad civil interesó la condena de D. Francisco a indemnizarle en la suma de 525 € por el tiempo de curación de las lesiones.

TERCERO.- En igual trámite, la defensa del acusado D. Francisco González Pérez elevó sus conclusiones a definitivas interesando su libre absolución y la defensa de D. Santiago Berriolópez González elevó sus conclusiones a definitivas si bien interesando en caso de condena la apreciación de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales, excepto la de dictar sentencia en el plazo legal, por acumulación de asuntos pendientes.

HECHOS PROBADOS

Ha quedado probado y así se declara que sobre las 15:00 horas del pasado día 31 de agosto de 2011, el hoy acusado D. FRANCISCO GONZÁLEZ PÉREZ, mayor de edad, con DNI número 14879900-G y sin antecedentes penales computables en esta causa, acudió al bar Teleclub sito en la localidad de Otañes, donde en ese momento se encontraba el también acusado D. SANTIAGO BERRIOLÓPEZ GONZÁLEZ, mayor de edad, sin antecedentes penales y con DNI número 13792928-N. En dicho local, D. Francisco González Pérez, que había sido Alcalde Pedáneo de Otañes hasta el fin de la anterior legislatura, se dirigió al nuevo alcalde pedáneo de dicha localidad D. Santiago Berriolópez González y le pidió explicaciones acerca del motivo por el cual estaba citando a los vecinos de la pedanía para informarles de las supuestas irregularidades cometidas por D. Francisco cuando ejerció como Alcalde Pedáneo, iniciándose una discusión entre ambos en el curso de la cual D. Santiago golpeó a D. Francisco provocando que éste cayera al suelo, siendo D. Santiago sujetado por los allí presentes. No ha quedado acreditado que D. Francisco antes de ser golpeado por D. Santiago llegara a agarrar a este último del brazo, ni que le diera un tirón o le zarandeara en modo alguno.

Una vez que D. Francisco se levantó del suelo tras este primer acometimiento, fue nuevamente golpeado por D. Santiago el cual en esta segunda ocasión le propinó un fuerte golpe en el rostro que provocó de nuevo su caída al suelo. No ha quedado acreditado que D. Francisco al levantarse del suelo tras su primera caída, llegara a coger un vaso, ni a esgrimirlo en modo alguno frente a D. Santiago.

A consecuencia de los acometimientos protagonizados por D. Santiago frente a Francisco, éste

sufrió lesiones consistentes en "erosión malar izquierda de 0,2 centímetros, edema y dolor en la oreja izquierda, edema temporal izquierdo doloroso a la palpación, erosiones múltiples en el labio inferior, cervicodorsalgia postraumática y fractura radicular con afectación del espacio interarticular de las piezas dentales 21 y 22". Para la curación de dichas lesiones D. Francisco precisó además de una asistencia inicial de tipo sintomático, tratamiento odontológico consistente en extracción de las piezas dentarias 21 y 22, sutura y retirada de la misma y colocación de un puente en las piezas dentarias 11 a 23, rehabilitación, así como cirugía (artrodesis) de la columna cervical por agravación de hernias discales preexistentes. Asimismo, el tiempo de estabilización de las lesiones padecidas por D. Francisco fue de 120 días todos ellos improductivos para el desempeño de sus actividades habituales, habiendo precisado durante 2 de ellos ingreso hospitalario. De igual modo, le restan como secuelas, una agravación del estado previo a nivel de la columna cervical y material de osteosíntesis en la columna cervical, presentando una cicatriz antero-cervical derecha postquirúrgica que se entiende le ocasiona un perjuicio estético ligero.

Asimismo, a consecuencia de la agresión protagonizada por D. Santiago, D. Francisco sufrió la rotura de las gafas que portaba cuyo coste de reposición ha sido estimado en la suma de 1.433 euros. De igual modo, tuvo que soportar gastos en concepto de tratamiento odontológico por importe de 1.267,80 euros. D. Francisco fue asistido tanto por el Servicio Cántabro de Salud como por el Servicio Vasco de Salud desconociéndose el coste de dichas asistencias.

La tramitación de la presente causa ha sufrido paralizaciones y retrasos que se consideran excesivos atendida su complejidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Valorando en su conjunto y del modo ordenado por el artículo 741 Ley de Enjuiciamiento Criminal, las pruebas practicadas en el juicio la Sala obtiene la razonable convicción de que los hechos enjuiciados, relatados como probados, son constitutivos de un delito de LESIONES, previsto y penado en el artículo 147.1 del Código Penal, al encontrarnos ante un acometimiento directo y reiterado protagonizado por un individuo, D. Santiago, frente a otro, D. Francisco, sin que por el contrario haya quedado acreditado que mediara agresión ni provocación previa alguna por parte de D. Francisco, ni que esté acometiera o intentara acometer a D. Santiago en modo alguno, lo que impide estimar acreditados ni el delito de Atentado, ni la falta de Lesiones por las que D. Francisco había sido acusado, encontrándonos por el contrario con que la recta valoración de la prueba practicada apunta sin duda razonable alguna a la existencia de una única agresión, por lo demás reiterada protagonizada por D. Santiago, tratándose de una agresión que por su naturaleza e intensidad, tal y como resulta de los numerosos informes médicos (folios 7,8 y 16) y médico forenses (folios 21, 44, 79, 98, 115, 125, 126, 127 y 310) causó menoscabos corporales para cuya curación se ha precisado, además de una primera asistencia facultativa tratamiento médico y quirúrgico.

Así pues, el examen detenido de la causa y en especial el resultado y valoración conjunta de las pruebas practicadas en el acto del plenario, permite a la sala concluir que la versión ofrecida por D. Francisco González Pérez reúne todos los requisitos exigidos por nuestra jurisprudencia para gozar de valor incriminatorio, encontrándonos con que su testimonio no sólo se ha mantenido de forma uniforme y persistente a lo largo de la causa, sino que también resulta creíble y verosímil, al no haberse puesto de manifiesto la existencia de enfrentamientos o malas relaciones previas entre los acusados que hagan dudar de la credibilidad de D. Francisco, y existir suficiente corroboración periférica a la vista no sólo de las testificales practicadas, sino muy especialmente de los numerosos informes médicos obrantes en la causa, así como del informe médico forense de sanidad obrante al folio 127 y aclarado por el obrante al folio 310, informes que han sido debidamente ratificados y explicados con todo detalle por el perito forense que los elaboró en el acto del plenario y que evidencian que D. Francisco con total inmediatez a suceder los hechos, sufrió lesiones plenamente compatibles con el relato de los hechos que el mismo mantiene.

En este sentido, nos encontramos con que consta documentado en la causa que D. Francisco González Pérez, el mismo día 31 de agosto de 2011 en que sucedieron los hechos, acudió al servicio de urgencias del centro de salud de Coto Ino donde fue diagnosticado de "una contusión en la cara", presentando dolor a la palpación a nivel temporal izquierdo supraótico con edema, erosión en la región malar izquierda, edema y dolor en la oreja izquierda y signos de erosión en el labio inferior con dolor en la apertura mandibular, siendo derivado al hospital para la realización de una

radiografía mandibular y craneal (informes médicos obrantes a los folios 7 y siguientes), siéndole asimismo diagnosticada una contractura cervical, lesiones todas ellas plenamente compatibles con la agresión que D. Francisco ha venido describiendo de forma unívoca a lo largo de la causa consistente en haber recibido cuanto menos un fuerte puñetazo en el rostro con caída en dos ocasiones al suelo. De igual modo, tal y como con toda claridad lo ha expuesto en el plenario el perito forense, y así se desprende de la documentación médica y odontológica aportada un D. Francisco, el mismo habida cuenta las molestias que presentaba en la boca acudió a la clínica privada Vital Dent, constando documentado en la causa que pidió cita el día 9 de septiembre de 2011 (informe obrante al folio 51) al presentar un dolor continuo tras la agresión en la pieza número 21, así como que en la primera revisión que se le efectuó el día 29 de septiembre de 2011 tras la realización de una radiografía periapical, -prueba diagnóstica odontológica específica que tal como expuso el médico forense en el acto del juicio no se realiza de forma convencional en los servicios de urgencia sanitarios-, fue diagnosticado de una "*fractura radicular con afectación del espacio interarticular de las piezas dentarias 21 y 22*". Por todo ello, la sala asumiendo íntegramente el criterio expuesto por el médico forense en el acto del plenario llega a la racional conclusión de que todas las lesiones contempladas por el médico forense, incluidas por tanto las fracturas dentarias y la cervicodorsalgia postraumática, están causalmente ligadas a la agresión de que fue objeto D. Francisco por parte de D. Santiago, para cuya curación se precisó tratamiento odontológico, rehabilitador e incluso tratamiento quirúrgico al haberse agravado un estado previo patológico que D. Francisco presentaba a nivel

de la columna cervical, y que si bien hasta ese momento era asintomático, tras la agresión sufrió una importante agravación, comenzando a presentar una clínica dolorosa que al no mejorar con los tratamientos convencionales, precisó tratamiento quirúrgico. En suma, la versión de los hechos ofrecida por D. Francisco que relata haber sido objeto de dos agresiones en el rostro que provocaron su caída al suelo, encuentra plena corroboración periférica a la vista de las lesiones que le fueron objetivadas con total inmediatez a suceder los hechos, y cuya naturaleza de ubicación son plenamente compatibles con la agresión descrita, entendiéndose que la versión ofrecida por D. Santiago que en el acto del plenario tan sólo reconoció haber empujado a Francisco negando haberle golpeado en el rostro, no se compadece ni explica las graves lesiones que éste presentaba en el rostro.

Asimismo, la versión ofrecida por D. Francisco también goza de suficiente corroboración testifical. En este sentido, todos los testigos han reconocido que vieron a Francisco en el suelo, habiendo reconocido el propio D. Santiago haber propinado a D. Francisco dos empujones que provocaron en ambos casos su caída al suelo. Siendo esto así, y sin desconocer que existen discrepancias entre los testimonios ofrecidos por los testigos que depusieron en el plenario, la sala de entre todos ellos, da una especial credibilidad a los ofrecidos por los testigos D. Alberto Urquidi Sanz, y D. Juan Antonio Irusta, por cuanto los mismos se han mantenido sin variaciones a lo largo de la causa. Así pues, D. Alberto Urquidi manifestó que si bien no escuchó "una voz más alta que otra", de repente escuchó un golpe y vio a Francisco caer al suelo, declarando en el plenario que vio a Santiago "*visiblemente alterado*",

"junto a él" o "encima de él", -en referencia a Francisco-. Dicho testigo relató, que tanto él como el hijo de D. Santiago sujetaron a Santiago, así como que ambos acusados tras el primer incidente salieron al exterior del bar, relatando que si bien no vio lo que sucedió en el exterior pudo apreciar como Francisco cuando entró de nuevo al bar presentaba *sangre en la boca*. De igual modo, el testigo D. Juan Antonio Irusta que también se encontraba en el local, al igual que el Sr. Urquidi relató que cuando se dio cuenta, ya "vio a Paco en el suelo" relatando que Santiago "fue sobre él", motivo por el cual "ellos fueron a retirarle" porque "Santiago iba hacia Paco a pegarse". Dicho testigo con toda claridad relató que vio como Santiago le daba un puñetazo a Paco la cara y le rompía las gafas, lo que sucedió tras la primera caída de Francisco al suelo, relatando que tuvo que sujetar con fuerza a Santiago y que *vio sangre en la cara de Francisco*. Dichos testimonios por su contundencia ponen de manifiesto, que Santiago agredió al menos en dos ocasiones a Francisco, propinándole cuanto menos en una de ellas un puñetazo en el rostro que le hizo caer al suelo, le rompió las gafas y le causó una herida sangrante, lo que en suma viene a corroborar la versión ofrecida por D. Francisco, la cual debe de prevalecer sobre la ofrecida por D. Santiago, de claro carácter exculpatorio.

En este sentido, resulta significativo a juicio de la sala, que D. Santiago el mismo día de los hechos en sede policial (declaración obrante al folio 4) y transcurridas ya más de tres horas desde el incidente, no hiciera mención alguna a que D. Francisco le acometiera en modo alguno, ni tampoco refiriera a los agentes de la Guardia Civil que había sufrido algún tipo de lesión, máxime, cuando en el acto del plenario

relató que cuando llegó a su casa tras los hechos se percató del agarrón en el brazo notando un dolor en el hombro izquierdo, no siendo por tanto creíble a juicio de la sala que de haber sido objeto de una previa agresión por parte de Francisco no lo hubiera mencionado en su declaración policial en la que por el contrario se limitó a afirmar que toda vez que Francisco le recriminó que estuviera informando a los vecinos de las irregularidades cometidas por él y le llamo "mentiroso", "el dicente le agrade". Asimismo, D. Santiago tampoco ha explicado a satisfacción por que motivo no acudió al hospital sino hasta el día siguiente a suceder los hechos, ni por que no interpuso denuncia frente a Santiago sino hasta el día 2 de septiembre, entendiendo la sala, que las lesiones que le fueron objetivadas con motivo de dicha asistencia (partes médicos y médico forenses obrantes a los folios 54 y 80) consistentes en dolor a la palpación en el hombro izquierdo y equimosis en resolución en el brazo izquierdo, son plenamente compatibles con el hecho de haber sido sujetado y contenido por los allí presentes para evitar que no continuara agrediendo a Santiago, como así lo han expuesto los testigos antes mencionados. Así pues, la levedad de la lesión que presentaba D. Santiago, unida al hecho de que el mismo no denunció en los momentos iniciales haber sido objeto de ningún tipo de agresión por parte de D. Francisco, impiden a la sala estimar acreditado que D. Francisco tras recriminar su proceder a Santiago, como éste sostiene, le sujetará fuertemente del brazo y le diera un tirón que incluso le movió hacia adelante, máxime, si se tiene en cuenta que D. Santiago no sólo es veinte años más joven que D. Francisco, sino que además existe una clara desproporción de fuerzas entre ambos, teniendo D. Santiago una corpulencia física muy superior a la de D. Francisco, que hace escasamente

creíble que éste le hubiera zarandeado en la forma relatada por D. Santiago. No obsta a lo anterior lo declarado por los testigos D. Miguel Ángel Antolín y D. Santiago Berriolópez Llamosas -hijo de Santiago-, por cuanto dichos testigos ni tan siquiera han mantenido una versión totalmente concorde de lo sucedido, no siendo ni tan siquiera sus versiones coincidentes con la ofrecida por el propio D. Santiago. Así pues, nos encontramos con que el primero de ellos afirmó que vio a Francisco agarrar a Santiago y que éste le empujó cayendo al suelo, relatando que cuando se levantó le vio con un vaso en la mano que le intentaban quitar, siendo nuevamente empujado por Santiago y relatando incluso que en esta segunda ocasión D. Francisco también empujó a Santiago, lo que en ningún momento ha sido mencionado por este último, negando a diferencia de la mayoría de los testigos haber visto sangrar a Francisco, lo que no se compadece con la naturaleza de las lesiones que el mismo presentaba. De igual modo, el hijo de D. Santiago tras relatar que en primer lugar Francisco agarró fuertemente a su padre y éste le empujó cayendo al suelo, también relató haber visto a Francisco dirigirse a su padre portando un vaso con intención de agredirle, declarando que su padre le volvió a empujar, y que a Francisco se le cayeron las gafas, y que le quitaron el vaso tras haber recibido el segundo empujón por parte de su padre. Esta versión tampoco se compadece con la ofrecida por ningún otro testigo, por cuanto si bien todos ellos a excepción del Sr. Urquidi afirmaron que vieron a Francisco coger un vaso tras caer la primera vez al suelo, -pese a no ponerse de acuerdo a la hora de indicar el lugar donde se encontraba dicho vaso-, lo cierto es que todos los testimonios también coinciden en apuntar que D. Francisco no llegó a esgrimir dicho vaso frente a D. Santiago, por cuanto el mismo le fue retirado, bien por

la camarera Tamara, -pese a que esta no lo recuerda-, o por alguno de los allí presentes, de suerte que cuando fue nuevamente agredido por D. Santiago el mismo no podía portar vaso alguno en su mano. En suma, la sala entiende que la versión ofrecida por D. Santiago cuando afirma que fue inicialmente agredido por D. Francisco, así como que en la segunda ocasión este intentó agredirle con un vaso, deben de entenderse desde la óptica del derecho de defensa, de ahí que no haya quedado en modo alguno acreditado que D. Francisco acometiera a D. Santiago, debiendo por ello ser absuelto tanto del delito de Atentado como de la falta de lesiones por las que también había sido acusado.

SEGUNDO.- Del mencionado delito de lesiones resulta responsable en concepto de autor, ex artículo 28 del Código Penal, **D. SANTIAGO BERRIOLÓPEZ GONZÁLEZ**, al haber ejecutado los hechos directa, personalmente y con conciencia y voluntad, vistos los razonamientos anteriormente expuestos, debiendo analizarse la concurrencia de la eximente completa o incompleta de legítima defensa invocada por D. Santiago, así como de la atenuante de dilaciones indebidas también alegada por dicho acusado.

En relación con la apreciación de la eximente bien sea completa o incompleta de legítima defensa, lo cierto, es que no ha quedado en modo alguno acreditada la concurrencia de los presupuestos exigidos para su apreciación. Así las cosas, la eximente de obrar en "Legítima defensa" prevista en el artículo 20.4 del Código Penal, como causa de exclusión de la antijuricidad, exige para su apreciación, la existencia de una agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y la falta de provocación suficiente por parte del defensor.

1.- Por lo que se refiere a la agresión ilegítima, la misma ha de suponer la presencia, la realidad de un acometimiento físico, violento contra una persona, y que ese ataque ha de ser inminente (esa inminencia no supone que haya comenzado a materializarse, sino que se va a producir inmediatamente), injusto, inmotivado, imprevisto y directo. La doctrina y la jurisprudencia, en relación con este primer y principal aspecto, vienen expresando de forma unánime que ha de quedar adecuadamente probada una racional convicción de un peligro objetivo y actual con posibilidad de dañar. Resulta evidente, a la vista del relato de hechos probados, y de la argumentación desplegada en el fundamento jurídico anterior, que en el presente caso no ha quedado acreditado que D. Francisco antes de ser agredido por D. Santiago en ninguna de las dos ocasiones, le acometiera en modo alguno, no estando tampoco suficientemente acreditado que llegara a esgrimir frente al mismo un vaso, por cuanto como se ha expuesto la valoración conjunta de los testimonios ofrecidos en el plenario apunta a que los allí presentes le impidieron coger el mencionado vaso, el cual le fue arrebatado por los allí presentes antes de ser golpeado fuertemente en el rostro por D. Santiago, habiendo incluso declarado el testigo D. Pedro Zunzunegui con referencia al mencionado vaso *"que no llegó a cogerle porque se lo quitó Tamara"*, declarando dicha testigo que Francisco hizo *"un amago"* de coger un vaso y alguien se lo quitó, puntualizando el que *"no sabe si lo llegó a coger"*, para añadir que cree que ella no fue la persona que se lo quitó. En suma, no existe prueba alguna de la existencia de una agresión ilegítima como presupuesto de una acción defensiva.

2.- El segundo de los elementos es la necesidad de la defensa, y la racionalidad del medio empleado para impedir o repeler al agresión. Como se nos recuerda de forma reiterada, "la defensa ha de ser la única opción

ante el ataque", y ha de analizarse en cada caso si el sujeto se sale o no del marco previsto para la aplicación de este elemento con actos que ya no se corresponden a la reacción defensiva porque si negamos la necesidad de defensa desaparece un requisito esencial para la aplicación de la eximente.

Al hilo de lo anteriormente expuesto, y partiendo de la inexistencia de una previa agresión ilegítima, es obvio que tampoco concurre este segundo requisito, máxime cuando la reacción de D. Santiago, consistente en propinar a D. Francisco sendos golpes con capacidad para derribarlo al suelo y fracturarle dos piezas dentarias, resulta claramente desproporcionada y excesiva, habida cuenta además la diferencia de edad y corpulencia física entre ambos, lo que en cualquier caso excluiría la exigida finalidad de rechazar o repeler tal alegada previa agresión. Huelga por tanto analizar el tercero de los requisitos antes mencionado.

En suma no cabe apreciar la concurrencia de dicha causa de justificación ni como completa ni como incompleta.

- Finalmente, la alegación de la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas prevista en el artículo 21.6 del código penal, obliga a la sala a analizar si en el presente caso se ha producido alguna dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, no atribuible al inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa.

En relación con la apreciación de dicha atenuante se ha de recordar que conforme a reiterada jurisprudencia, entre la que cabe mencionar las muy recientes SSTs de 23 de septiembre, 30 de septiembre y

15 de octubre de 2015, esta causa de atenuación aparece regulada en el artículo 21.6^a del Código Penal tras la reforma operada por la LO 5/2010, exigiendo para su aplicación con efectos de atenuante simple que se trate de una *dilación extraordinaria e indebida*, -lo que excluye los retrasos que no merezcan estas calificaciones-, y, además, *que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa*. Su apreciación como muy cualificada requerirá de una paralización que pueda ser considerada superior a la extraordinaria, o bien que ésta, dadas las concretas circunstancias del penado y de la causa, pueda acreditarse que ha ocasionado un perjuicio muy superior al ordinariamente atribuible a la dilación extraordinaria necesaria para la atenuante simple. Reitera el TS en su STS de 21 de abril de 2014, que son dos los aspectos que han de tenerse en consideración a la hora de interpretar esta atenuante. Por un lado, la existencia de un "plazo razonable", a que se refiere el artículo 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que reconoce a toda persona el «derecho a que la causa sea oída dentro de un plazo razonable», y por otro lado, la existencia de "dilaciones indebidas", que es el concepto que ofrece nuestra Constitución en su artículo 24.2. En realidad, son conceptos confluyentes en la idea de un enjuiciamiento sin demora, pero difieren en sus parámetros interpretativos. Las dilaciones indebidas son una suerte de proscripción de retardos en la tramitación, que han de evaluarse con el análisis pormenorizado de la causa y los *lapsos temporales muertos* en la secuencia de tales actos procesales. Por el contrario, el "plazo razonable" es un concepto mucho más amplio, que significa el derecho de todo justiciable a que su causa sea vista en un tiempo prudencial, que ha de

tener como índices referenciales la complejidad de la misma y los avatares procesales de otras de la propia naturaleza, junto a los medios disponibles en la Administración de Justicia. Por ello, el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, que no es identificable con el derecho procesal al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes, impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver las cuestiones que les sean sometidas, y también ejecutar lo resuelto, en un tiempo razonable. Se trata, por lo tanto, de un concepto indeterminado que requiere para su concreción el examen de las actuaciones procesales, a fin de comprobar en cada caso, si efectivamente ha existido un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente justificado por su complejidad o por otras razones, y que sea imputable al órgano jurisdiccional y no precisamente a quien reclama. En particular debe valorarse la complejidad de la causa, el comportamiento del interesado y la actuación de las autoridades competentes (STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso González Doria Durán de Quiroga c. España y STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso López Solé y Martín de Vargas C. España, y las que en ellas se citan). Ahora bien sí existe acuerdo en la doctrina en que no basta la genérica denuncia del transcurso del tiempo en la tramitación de la causa, sino que se deben concretar los períodos y demoras producidas, y ello, porque el concepto "dilación indebida" es un concepto abierto o indeterminado, que requiere en cada caso, una específica valoración acerca de si ha existido efectivo retraso (elemento temporal) y junto a la injustificación del retraso y la no atribución del retraso a la conducta del imputado, debe de determinarse que del mismo se han derivado consecuencias gravosas, ya que aquel retraso no tiene

que implicar éstas de forma inexorable y su daño no cabe reparación debiendo acreditarse un específico perjuicio más allá del inherente al propio retraso.

Al hilo de la anterior doctrina, nos encontramos con que el acusado que la alega afirma que la causa estuvo paralizada desde el mes de diciembre del 2012 hasta el mes de junio de 2013, afirmando que existió otra paralización de unos cinco meses desde febrero de 2014. La sala, tras analizar las actuaciones ha podido constatar que en fecha 11 de diciembre de 2012 el Juzgado instructor dictó Auto desestimatorio de un recurso de reforma (folio 264), interponiéndose por D. Santiago recurso de apelación en fecha 26 de diciembre el 2012 el cual no se incoó sino hasta el 5 de junio de 2013, no siendo resuelto sino hasta el 30 de enero del 2014 (folio 281). De igual modo, se aprecia que si bien D. Santiago Berrio López interpuso denuncia frente a D. Francisco el día 2 de septiembre 2011, la misma no se acumuló a las diligencias previas incoadas en virtud de la denuncia interpuesta por D. Francisco, sino hasta el 17 de julio de 2014 (folio 300), encontrándonos asimismo con que la tramitación de la fase intermedia se ha demorado desde el día 8 de octubre de 2014 en que se dictó el Auto de acomodación a los trámites del procedimiento abreviado por delito, hasta el día 1 de junio de 2015 en que se dictó el Auto de apertura de juicio oral, remitiéndose de forma errónea las actuaciones para enjuiciamiento al Juzgado de lo penal que las incoó con fecha 3 de febrero de 2016, remitiéndolas hasta audiencia provincial competente con fecha 11 de mayo de dicho año. Lo anterior, evidencia que en el presente caso pese a la escasa complejidad de la causa, la misma se ha demorado de forma indebida y extraordinaria, habiendo sufrido los períodos de paralización antes mencionados, lo que a juicio de la

sala determina que sea de aplicación la atenuante de dilaciones indebidas, si bien con carácter de simple.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 109 y 116 del Código Penal, toda persona criminalmente responsable de un delito o falta, lo es también civilmente, si del hecho se derivaren daños o perjuicios.

En el presente caso a la vista de los informes médicos y médico forenses obrantes en autos, y aplicando analógicamente las cuantías de las indemnizaciones previstas para los accidentes de tráfico, en concreto el baremo vigente en la fecha de estabilidad lesional que tuvo lugar en el mes de diciembre del año 2011, según el acuerdo del Pleno de nuestra Audiencia Provincial de fecha 18 de febrero de 2005, el acusado D. Santiago deberá de indemnizar a D. Francisco en las siguientes cantidades:

- Por los 120 días de curación estimados por el médico forense en su informe, siendo 2 de ellos de ingreso hospitalario, a razón de 55,27 euros por día impeditivo y de 67,98 euros/día de ingreso hospitalario, la suma global de **6.657,82 euros**.

No cabe por el contrario, pese a la pretensión de D. Francisco concederle más días que los establecidos de forma promediada por el médico forense en su informe, ello por cuanto es de sobra conocido que no cabe equiparar los períodos de sanidad o de estabilización lesional, con los de baja médica, tratándose de conceptos distintos, no pudiendo computarse a efectos indemnizatorios aquellos periodos ajenos al curso natural del proceso evolutivo de las lesiones, tales como los tiempos espera propios de la

administración sanitaria. Así pues, la sala comparte el criterio del médico forense, el cual para fijar los tiempos de curación o estabilización lesional ha atendido a criterios medios, habiendo tenido en cuenta el estado previo patológico del paciente a nivel de la columna vertebral, por cuanto el mismo ha contribuido a la agravación de sus lesiones y ha motivado la necesidad de un tratamiento quirúrgico y rehabilitador posterior.

- Por las secuelas consistentes en agravación del estado previo a nivel de columna vertebral, en grado moderado y material de osteosíntesis en la columna cervical en grado ligero, secuelas cuya realidad y entidad ha resultado acreditada a la vista del informe médico forense, la suma global de **5.002,83 euros** al haberse valorado ambas secuelas en un total de 7 puntos a razón de 714,69 €/punto.

- En concepto de perjuicio estético consistente en una cicatriz antero cervical derecha postquirúrgica que siguiendo el criterio médico forense se entiende ligero y se valora en 1 punto, la suma de **632,28 euros**.

- Por los gastos médicos padecidos, en concreto por el tratamiento odontológico al que sí tuvo que someter según criterio médico forense, y cuyo coste consta perfectamente documentado en el presupuesto y factura obrantes a los folios 122 y 145 y siguientes de la causa, la suma de **1.267,80 euros**.

- Finalmente, estando acreditado a la vista de lo declarado por prácticamente todos los intervinientes, incluido el propio D. Santiago y su hijo, que a consecuencia de la agresión a D. Francisco se le cayeron las gafas y se le rompieron, y obrando la causa

al folio 357 una factura expedida a nombre de D. Francisco González Pérez tan sólo seis días después de suceder los hechos relativa la adquisición de unas gafas progresivas por importe de 1.433 euros, D. Santiago también tendrá que resarcir a D. Francisco en dicho importe, por entender que su reposición fue necesaria.

No obstante lo anterior, no cabe conceder a D. Francisco cantidad alguna en concepto de consulta de traumatología, ello por cuanto si bien al folio 54 consta que el mismo abonó 85 euros a la clínica Castro en concepto de consulta de traumatología, se desconoce cuál fue el motivo de dicha consulta y si la misma guardaba o no relación con los hechos aquí enjuiciados.

Asciende por tanto el total indemnizable a la suma de lo global de 14.993,73 euros.

Asimismo, constando acreditado que D. Francisco fue asistido de sus lesiones tanto por el Servicio Cántabro de Salud como por el Servicio Vasco de Salud desconociéndose el coste de dichas asistencias, el acusado D. Santiago tendrá que reembolsar a dichos servicios el coste a que asciendan tales asistencias a determinar en ejecución de sentencia, tal y como así lo ha interesado el Ministerio Fiscal.

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 regla 1ª del Código Penal, al concurrir la atenuante de dilaciones indebidas, y habida cuenta lo inopinado de la agresión, el hecho de que la misma fue reiterada, la evidente desproporción tanto de fuerza como de edad entre el agresor y el agredido, y la gravedad de las lesiones causadas que provocaron incluso dos fracturas dentales, procede imponer a D.

Santiago Berriolópez González la pena de 1 año de Prisión, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho sufragio pasivo durante el tiempo de condena prevista en el artículo 56 del Código Penal.

QUINTO.- El artículo 58 del Código Penal, dispone que el tiempo de privación de libertad sufrido preventivamente, se abonará en su totalidad para el cumplimiento de la pena o penas impuestas en la causa en que dicha privación haya sido acordada, aplicándose igual regla a las privaciones de derechos acordadas cautelarmente.

SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal y en los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las costas procesales se entienden impuestas por la ley a los criminalmente responsables de todo delito o falta.

Por cuanto antecede, VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en ejercicio de la potestad jurisdiccional conferida por la Soberanía Popular y en nombre de Su Majestad El Rey,

FALLO

Que **DEBEMOS CONDENAR y CONDENAMOS a D. SANTIAGO BERRIOLÓPEZ GONZÁLEZ**, como Autor responsable de un delito de **LESIONES** ya definido, con la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas, a la pena de **UN AÑO DE PRISION** y a la pena **ACCESORIA DE INHABILITACION**

ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE CONDENA, así como al pago de las dos terceras partes de las costas incluidas las de la acusación particular.

Asimismo, se condena al acusado D. SANTIAGO BERRIOLÓPEZ GONZÁLEZ a indemnizar a D. Francisco González Pérez en concepto de responsabilidad civil en la suma de 14.993,73 euros y a los Servicios Cántabro y Vasco de Salud en el coste a que asciendan las asistencias médicas prestadas a D. Francisco a determinar en ejecución de sentencia.

De igual modo, DEBEMOS ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a D. FRANCISCO GONZÁLEZ PÉREZ, del delito de Atentado a la autoridad y de la falta de lesiones por las que había sido acusado, declarando de oficio las dos terceras partes de las costas causadas.

Abónese en su totalidad el tiempo que el o los acusados hayan estado privados de libertad por esta causa si no les hubiera sido abonado con anterioridad.

Recábase, en su caso, la pieza de responsabilidad civil, al Juzgado de Instrucción del que procede la causa.

Dese a las piezas de convicción y efectos intervenidos el destino previsto en las Leyes y Reglamentos.

Notifíquese la presente resolución a los perjudicados, tal y como dispone el artículo 789.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.



Esta Sentencia no es firme. Contra la misma puede prepararse *recurso de casación* ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo dentro de los CINCO DIAS siguientes al de la última notificación de la Sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E/

PUBLICACION: Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Sra. Magistrada que la firma, estando celebrando Audiencia Pública, el mismo día de su fecha.
DOY FE.